



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

12446/2020 DONTA SA c/ EN - AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
Juzg. n° 10

Buenos Aires, 12 de mayo de 2026. ID

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. La firma DONTA S.A. promovió una demanda, en los términos del artículo 23, inciso a), de la ley 19.549, contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA—) con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones n°s "RESOL -2019-1-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMOP" y "RESOL-2019-2-EAFIP-SDGOPIM#DGIMOP", emitidas en el marco del expediente administrativo "SIGEA 18170-3646-2017".

Reseñó que las resoluciones impugnadas resultan confirmatorias de las resoluciones n°s 208/2017 y 209/2017 —cuestionadas subsidiariamente— por medio de las cuales se resolvió: 1) tener por desistida a la firma actora del recurso de reconsideración interpuesto contra las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016, 2) rechazar la imputación de los bienes declarados en los términos del título I del libro II de la ley 27.260 en la base imponible de los ajustes efectuados en las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016, y 3) rechazar los beneficios y liberaciones previstas en el artículo 46 de la ley 27.260.

Indicó que: 1) el sinceramiento fiscal efectuado e imputado a las determinaciones de oficio de IVA y Ganancias (resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016) “resultó válido y plenamente eficaz”, 2) Las resoluciones impugnadas son nulas, en tanto fueron dictadas sin respetar el procedimiento de determinación de oficio previsto en el artículo 17 de la ley 11.683, y 3) subsidiariamente, peticionó que se de tratamiento al recurso de reconsideración interpuesto contra las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016.

II. El juez rechazó la demanda, con costas.

Sostuvo:



1) Antecedentes administrativos:

(i) Mediante la resolución n° 6/2016 se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2011, toda vez que “se detectaron diferencias a favor (...) provenientes de la impugnación de pasivos, representados por contratos de mutuo simulados, a los que le cabe la aplicación de la presunción legal establecida en el artículo 18, inciso f), de la Ley N° 11.683”.

(ii) Mediante la resolución n° 7/2016 se determinó de oficio el IVA correspondientes a los períodos fiscales 12/2008, 1/2009 a 12/2009, 3/2010 y 6/2011, dado que se observaron “diferencias a favor (...) provenientes de la impugnación de pasivos, representados por contratos de mutuo simulados”.

(iii) El 4 de agosto de 2016 la firma actora interpuso recurso de reconsideración, en los términos del artículo 76, inciso a), de la ley 11.683 contra las resoluciones determinativas, unificando su defensa en atención a “la íntima vinculación que guardan”.

(iv) El 18 de noviembre de 2016 la firma actora presentó “Multinota Impositiva” (F. 206/I), en la que manifestó “en carácter de declaración jurada, que la empresa se presentara bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal, Ley 27.260, a los efectos de regularizar la controversia planteada” en las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016 recurridas.

(v) El 23 de noviembre de 2016 presentó una nueva “Multinota Impositiva” (F. 206/I) en la que adjuntó copias de los F. 408/NM – “Allanamientos” con relación a las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016.

(vi) La contribuyente informó que realizó la imputación autorizada por el artículo 30 de la resolución general n° 3919/2016 —reglamentaria de la ley 27.260—, detallando que “a dichos efectos se imputa la base imponible de \$15.918.725,48 que surge de la presentación del régimen del Título I del Libro II de la Ley 27.260 presentada el día 22/11/2016, y su complementaria presentada el 23/11/2016 por \$96.786,00. Se imputan las citadas bases imponibles a los siguientes impuestos: Impuesto a las ganancias: año 2008, \$1.504.800,00; año 2009 \$14.251.291,01 y año 2011 \$159.065,98. Total: \$ 15.915.156,99.- Al Impuesto al valor agregado: año 2010 \$95.964,33. De este





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

12446/2020 DONTA SA c/ EN - AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Juzg. n° 10

modo, imputamos los montos referidos en el Impuesto a las Ganancias a la resolución determinativa de oficio que se identifica a continuación: Resolución Nro. 6/2016 de fecha 22 de junio de 2016 (...). A la vez, imputamos los montos referidos en materia del impuesto al valor agregado a la determinación de oficio que identificamos a continuación: Resolución Nro. 7/2016 de fecha 22 de junio de 2016 (...). Adicionalmente manifestamos con carácter de declaración jurada que DONTA SA no se halla incurso en las exclusiones del artículo 84 de la ley 27.260”.

(vii) La Dirección Regional Centro II de la Dirección General Impositiva emitió la resolución n° 208/2017 por medió de la cual resolvió: 1) Tener por desistido “el recurso de reconsideración incoado (...) contra la Resolución 6/2016 (...) en virtud del allanamiento total e incondicional a la pretensión fiscal efectuado el día 21/11/2016”, 2) Rechazar “la imputación realizada por la contribuyente DONTA S.A. ante [esa] Administración Federal de los bienes declarados en los términos del Título I del Libro II de la Ley N° 27.260”, y 3) No hacer lugar “a los beneficios y liberaciones referidos en el artículo 46 de la Ley N° 27.260 y normas concordantes pretendidos por la encartada, en relación a los ajustes practicados en la Resolución N° 06/2016”.

Para así decidir, remarcó que “corresponde observar que se encuentran agregados a los presentes obrados los Formularios de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo) debidamente intervenidos por la Agencia de AFIP donde se encuentra inscripto el encartado, con fecha 21/11/2016. Que en virtud del precitado allanamiento, deviene en abstracto la resolución del recurso de reconsideración oportunamente incoado”.

Por otra parte, en lo que respecta al acogimiento efectuado, expuso que “[l]o que la ley permite es declarar bienes que se encontraban ocultos por los contribuyentes (...). [S]ólo se pueden declarar bienes, incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, por lo que el intento de cualquier otro tipo de exteriorización (vgr.: disminución de pasivos), aún cuando generen un incremento patrimonial, resultan improcedentes (...). Resulta ser que la propia ley exige una vinculación causal entre los bienes que



se declaran y las obligaciones que se pretenden liberar, contrario sensu, y en virtud del criterio de interpretación restrictiva que debe otorgársele a este tipo de beneficios, si dicha vinculación no existe, no habrá liberación”.

Asimismo, destacó que “[l]os pasivos ficticios contabilizados por la rubrada no pueden ser la contrapartida de activos ocultos por lo que la contribuyente no podría liberarse del ajuste relativo a aquellos exteriorizando bienes con los que carecen de vinculación, pudiendo dicho ajuste haber sido regularizado por la moratoria establecida por el Título II del Libro II de la misma ley”.

Concluyó que “[n]o requerir la existencia de vinculación entre los bienes que se exteriorizan y los ajustes impositivos realizados, implicaría no sólo ir en contra de lo previsto expresamente por una norma legal sino que dejaría abierta la posibilidad de una planificación fiscal abusiva por parte de los contribuyentes”.

(viii) En la resolución n° 209/2017 reiteró idénticos fundamentos a los exteriorizados en la resolución n° 208/2017.

2) Normas aplicables:

(i) La ley 27.260 estableció el “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, disponiendo que “[l]as personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, (...) domiciliadas, residentes —conforme los términos del capítulo I, Título IX de la ley citada—, estén establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015, inscriptas o no ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, (...) podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante dicha Administración Federal, la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente Título, dentro de un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia de esta ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive” (artículo 36).

(ii) La ley determina que podrá ser objeto de la declaración “a) Tenencia de moneda nacional o extranjera; b) Inmuebles; c) Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, toda clase de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

12446/2020 DONTA SA c/ EN - AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Juzg. n° 10

instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotas partes de fondos y otros similares; d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico. Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación de la presente ley en el caso de bienes declarados por personas humanas y a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1° de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas jurídicas” (artículo 37).

(iii) Frente a la declaración voluntaria, los contribuyentes, en caso de corresponder, “[g]ozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, con respecto a las tenencias declaradas; (...) c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional” (artículo 46).

(iv) La resolución general n° 3919/2016 regula que “[e]l acogimiento al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, se efectuará entre el 1 de agosto de 2016 y 31 de marzo de 2017, ambas fechas inclusive, a través del servicio ‘Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior’ disponible en el sitio ‘web’ de este Organismo, con arreglo a lo establecido por el Anexo II, en el cual se procederá a la individualización de los bienes que se declaran y su valuación, mediante la confección del formulario de declaración jurada F. 2009. La presentación de dicho formulario implicará para el contribuyente o responsable —salvo prueba en contrario— el reconocimiento de la existencia y la valuación de los bienes declarados” (artículo 11).

(v) En el mismo sentido, establece que “[l]as liberaciones referidas en el Artículo 46 de la Ley N° 27.260 también alcanzan a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que, en su caso, la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de dicha ley. En este supuesto el contribuyente deberá allanarse total e incondicionalmente a la pretensión fiscal,



y desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo, en su caso, el pago de las costas y gastos causídicos. A fin de formalizar el allanamiento deberá presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia de este Organismo en la que se encuentre inscripto y que resulte competente para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión. La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará al interesado la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial en la que se sustancia la causa. Asimismo, el contribuyente deberá imputar, ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del Artículo 46 del citado texto legal. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio. No procederá la imputación de la declaración voluntaria cuando el importe de la determinación de oficio hubiese sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la aludida ley, aun cuando estuviera pendiente de apelación judicial o de una acción de repetición” (artículo 30).

3) Cuestión sustancial:

(i) La “interpretación de la norma en materia tributaria (...) es estrictamente rígida en los casos en que se conceden beneficios fiscales, como lo es el régimen de sinceramiento fiscal. Por lo tanto, debe estarse a la literalidad de la norma, siendo este el principio rigente para la interpretación, así como también debe ser considerado que, al tratarse de un régimen especial, es el legislador quien establece las concesiones y limitaciones para acceder a este, por lo que no puede el contribuyente interpretar la norma de forma tal, que obtenga un beneficio no previsto en el plexo legal, debiendo ajustar a este su conducta tributaria (conf. Fallos 253:332; 312:912; 315:820; 316:1115; 319:3208; 347:216)”.

(ii) Según las normas reseñadas, “a fin de proceder al sinceramiento e imputación de los bienes en los términos del artículo 30 de resolución general





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

12446/2020 DONTA SA c/ EN - AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO

Juzg. n° 10

n° 3919/2016, la contribuyente debía demostrar para resultar liberada del pago de los impuestos omitidos de ingresar, que estos “tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional”, según lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley 27.260.

Asimismo, en la ley “se postula que los activos que fueran sincerados, debían ser ‘exteriorizados’, en el marco del referido beneficio fiscal, según lo previsto en sus artículo 37 y 40”.

(iii) Por el término “exteriorización empleado por la ley de sinceramiento fiscal (...) debe interpretarse que la finalidad de la norma persigue la declaración de bienes o tenencias que no se encontraban en el patrimonio declarado del contribuyente, a fin de obtener un beneficio fiscal por su inserción al patrimonio, debiendo afrontar el pago de un impuesto especial”.

(iv) Tal interpretación surge del debate parlamentario en el cual “el Sr. diputado Bruggue sostuvo que ‘la cuestión referente al sinceramiento y exteriorización de capitales de fondos no declarados oportunamente por quienes se consideran evasores tributarios’(v. debate parlamentario del 15/06/16)”.

Por su parte, “los Sres. senadores Rozas y Godoy manifestaron que ‘[e]ste blanqueo tiene además otras características porque está siguiendo los lineamientos y el contexto internacional de la OCDE, del GAFI. Todos sabemos que a partir de 2017 va a haber un intercambio automático de información impositiva y que nadie va a poder tener dinero o bienes en el exterior que no estén declarados’ y que ‘[u]n sinceramiento ocurre cuando uno tiene que poner en evidencia o exponer ante la sociedad y el Estado algo que ha estado encriptado ((...) v. debate parlamentario del 29/07/16)”.

(v) En consecuencia, “se exige la presencia de los principios de trazabilidad y vinculación, es decir, que el bien ‘blanqueado’ se corresponda con el impuesto omitido de ingresar (conf. Sala IV in re ‘Casa Caliendo de Caliendo Gastón Enrique y Caliendo Carmelo Andrés SH (TF 69620307-I) y otros c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de organismo externo’, del 09/04/24)”.

(vi) La firma actora “postula que habría exteriorizado (de acuerdo manifiesta no sólo en su recurso residual, sino en su escrito inaugural) bienes



que ya se encontraban declarados en declaraciones juradas previas, encontrándose claramente vedado por la Ley N° 27.260 el sinceramiento de bienes que formaran parte del patrimonio del contribuyente. Tal como fue referido con anterioridad, la interpretación de la norma y el espíritu de los legisladores refiere a que la ‘exteriorización’ es la puesta en conocimiento de una información que se encontraba oculta a, en este caso, el organismo” fiscal

(vii) La contribuyente “estaría intentando subsumir su conducta a un régimen que no prevé el supuesto de hecho exteriorizado. Es decir, la norma no admite el blanqueo de bienes que ya se encontraban formando parte del patrimonio declarado del contribuyente”.

(viii) Las determinaciones de oficio “fueron motivadas por la detección de diferencias en favor del organismo provenientes de la impugnación de pasivos, representados por contratos de mutuo simulados”. Ante ese supuesto, “los pasivos fictos no pueden ser contrapartida de activos ocultos”.

(ix) No se puede aplicar un “blanqueo” sobre un pasivo ficto, “porque si el pasivo, como tal, no existe (contémplese, que la accionante dio ello por confirmado al allanarse a las determinaciones de oficio de las Resoluciones Nros. 06/16 y 07/16), es debido a que dicho adeudo ya fue cancelado con anterioridad, y, si ya fue pagado, resultaría imposible tener un activo vinculado para sincerar”.

III. La firma actora apeló ese pronunciamiento y expresó agravios los que fueron contestados.

Expuso los siguientes planteos:

(i) La exteriorización y declaración voluntaria efectuada “es absolutamente viable, legal y ajustada a los parámetros de la normativa de la Ley 27.260, RG 3919/16 y Decreto 895/16, siendo que la sentencia sólo utiliza posturas e interpretaciones de la ex AFIP sin sustento legal, realizando una hermenéutica de prohibiciones y obstáculos que no surgen de la ley ni de su reglamentación”.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

12446/2020 DONTOSA c/ EN - AFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Juzg. n° 10

(ii) De las normas reseñadas no surge que sólo puedan blanquearse “bienes ocultos”. Por el contrario, lo que exige para que el sinceramiento sea válido es que los bienes sean “preexistentes” a la fecha de su promulgación “pero no incluye el requisito de ocultos ni los prohíbe”.

(iii) Existen “incluso, ciertas cláusulas que expresamente lo admiten. Por ejemplo, la ley permite que se declare a nombre de una persona bienes que ya hayan sido declarados por terceros (artículo 38 2° párrafo) o el art. 39 cuando los bienes pertenezcan a sociedades del exterior, aunque sus accionistas hayan declarado las acciones”.

(iv) El juez “sólo menciona al ‘espíritu’ del legislador más no una plataforma legal precisa que recepta esa prohibición”.

(v) La firma actora “incorporó los bienes adquiridos en su balance general y omitió declarar el origen de los fondos como ingresos o ventas, optando por declarar que adeudaba los fondos en lugar de omitir la declaración de los bienes y por eso sufrió la determinación de oficio en los términos del art 18, inciso f) de la Ley 11.683 la que, a la postre, fue saneada mediante el acogimiento al sinceramiento fiscal”.

IV. Los agravios de la firma actora deben ser desestimados.

Ciertamente, sus argumentos se centran en que en la ley 27.260 solamente se exige para gozar de los beneficios allí dispuestos que los bienes contenidos en la declaración jurada voluntaria y excepcional deben ser “preexistentes”, aspecto sobre el cual no existe controversia y que se encuentra expresamente delimitado en la ley, en el decreto 895/2016 y en la resolución general 3919/2016.

Sin embargo, no hizo mérito de que la ley también previó la “exteriorización” de los bienes declarados para gozar del trato preferencial establecido en el régimen de sinceramiento fiscal.

Sobre ese punto se cimentó la decisión del juez y no fue correctamente rebatido por la parte actora.



V. No es cierto que el juez no fundó su decisión en las normas aplicables. Por el contrario, realizó un exhaustivo examen de la ley 27.260 y de la resolución n° 3919/2019 para exponer la conclusión de que para acceder a los beneficios previstos en el régimen debían darse dos requisitos: 1) que los bienes declarados deben ser “preexistentes” y 2) que esos bienes hayan permanecido “ocultos”, es decir fuera del control que debe ejercer la ARCA.

Este último surge expresamente de la ley, a diferencia de la afirmación que hace la firma actora. En efecto, de las normas reseñadas y examinadas por el juez surge que podrán presentar la declaración jurada voluntaria excepcional los sujetos inscriptos o no ante la "Administración Federal de Ingresos Públicos" (artículo 36) y que los declarantes quedarán liberados del pago de los impuestos que se hubiera omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional (artículo 46, inciso 'c').

Si los preceptos comentados no bastaran para dejar en claro el sentido pretendido por la ley, cabe agregar que ante la presentación de la declaración jurada voluntaria y excepcional la administración fiscal conserva sus facultades de verificación y en el caso en que detectara cualquier bien o tenencia que correspondiera a los sujetos declarantes, “a la fecha de preexistencia de los bienes, que no hubiera sido declarado mediante el sistema del presente Título (...) privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional de los beneficios indicados” en el artículo 46 invocado por la firma actora (artículo 46, segundo párrafo). Idéntica previsión se encuentra contenida en el artículo 16 del decreto 895/2016.

Por lo demás, los ejemplos que trae la parte actora a colación en su memorial —artículos 38, párrafo segundo, y 39— justamente sostienen el criterio fiscal que fue convalidado por el juez en tanto permiten la declaración de los bienes por los sujetos que efectivamente manifiestan capacidad contributiva. En otras palabras, por los verdaderos contribuyentes.

VI. Es claro, pues, que el régimen de sinceramiento fiscal previsto en la ley 27.260 tuvo como objetivo brindar a los contribuyentes diferentes





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

12446/2020 DONTA SA c/ EN - AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
Juzg. n° 10

posibilidades de “blanquear” o “regularizar” bienes que no fueron oportunamente exteriorizados en las correspondientes declaraciones juradas presentadas ante la administración fiscal.

Dicho sinceramiento exige una declaración que comprenda todo el capital no declarado a fin de gozar los beneficios fiscales allí establecidos.

VII. Esa tesis se ve respaldada por los antecedentes y los debates que precedieron en el Congreso Nacional a la sanción de la ley 27.260, aspectos que también fueron examinados por el juez.

En definitiva, es claro que la ley exige para gozar de los beneficios fiscales allí previstos que en la declaración jurada voluntaria y excepcional prevista en el régimen de sinceramiento se exterioricen bienes preexistentes y ocultos del control de la administración fiscal.

Una interpretación en el sentido propiciado por la firma actora llevaría, indefectiblemente, a ampliar los beneficios fiscales previstos en la ley 27.260 a situaciones que no fueron contempladas por la ley.

VIII. Sobre la base de esas consideraciones, corresponde rechazar la aplicación de los beneficios y liberaciones previstas en la ley 27.260.

Ello es así, toda vez que los tributos determinados en las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016 tuvieron su origen en los pasivos impugnados por considerarlos fictos —simulación de contratos de mutuos—. En efecto, la inspección actuante observó la falta de justificación de los mutuos con los que pretendió demostrar un activo previamente declarado.

Es útil retener que fue la propia firma actora la que sostuvo en todas las actuaciones que los bienes fueron incorporados en su balance comercial y declarados pero que omitió declarar el origen de los fondos.

En consecuencia, dado que los pasivos impugnados tuvieron como contrapartida una cuenta del activo, los bienes ya se encontraban declarados, por lo que se hallaban cancelados.



Como señaló el juez, no era posible tener un activo a sincerar vinculado con el ajuste efectuado en las resoluciones n°s 6/2016 y 7/2016 a fin de acceder a la liberación pretendida.

IX. En suma, corresponde desestimar los planteos formulados por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.

X. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte actora vencida (artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En mérito de las razones expuestas, el tribunal **RESUELVE:** Desestimar los agravios de la parte actora, con costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).

